

INSUMO ACCIÓN DE TUTELA - 2025-098

En atención a la solicitud elevada, me permito informar lo siguiente respecto de la acción de tutela presentada por la señora **JOSE LUIS BENAVIDES**:

1) Informar cómo se inició la actuación administrativa de determinación del deudor, en contra del accionante, ya que enuncia el mismo que, eso no fue un accidente de tránsito; sino un ataque delictivo.

Al respecto, se informa que la actuación administrativa de determinación del deudor y la obligación endilgada al accionante tiene su origen en el Proceso de Repetición adelantado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, cuando esta Entidad asume el pago de los servicios de salud (médicos, quirúrgicos, hospitalarios, entre otros), transporte al centro asistencial y/o indemnizaciones a víctimas derivadas de accidentes de tránsito en los cuales se encuentren involucrados vehículos automotores que no cuentan con póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT vigente al momento de los hechos.

En tales eventos, la cobertura no corresponde a la EPS del afiliado, sino que es asumida por la ADRES a través de la Subcuenta ECAT, conforme a lo dispuesto en la Ley 1753 de 2015 y la Resolución 1645 de 2016. Para estos efectos, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS radican ante esta Administradora las reclamaciones respectivas, acompañadas de las facturas y demás soportes relacionados con el evento. Posteriormente, la ADRES adelanta la auditoría correspondiente, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y validar la información relacionada con el siniestro, incluyendo la identificación del propietario y del conductor del vehículo involucrado.

Precisado lo anterior, se informa que, una vez realizada la búsqueda en el Sistema de Información SII-PRE ECAT, se evidenció que el vehículo tipo motocicleta identificado con la placa BIZ49E, de propiedad del señor JOSE LUIS BENAVIDES BENAVIDES, se encontró involucrado en un accidente de tránsito ocurrido el día 25 de febrero de 2019, circunstancia que dio lugar a la activación de la cobertura por parte de esta Entidad.

Ahora bien, frente al argumento del accionante según el cual “no se trató de un accidente de tránsito”, esta Administradora ya se pronunció de fondo mediante el acto administrativo No. 73797 del 4 de agosto de 2025, “por medio del cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa”. En dicho acto se señaló expresamente que, contrario a lo afirmado por el señor Benavides, los registros clínicos que obran en el expediente evidencian que el señor JHOAN HENRY CONTRERAS ARRIETA manifestó haber sido víctima de un accidente de tránsito, información que consta en la historia clínica y que desvirtúa la tesis de un presunto atentado delictivo.

Así mismo, se precisó que, conforme a la normativa vigente y a la doctrina administrativa aplicable, la historia clínica, la constancia médica de ingreso, la naturaleza de las lesiones y la información suministrada por el paciente al momento de la atención constituyen prueba suficiente para la clasificación del evento como accidente de tránsito, lo cual resulta

determinante para la activación de la cobertura por parte de la Subcuenta ECAT de la ADRES, en aplicación del principio de inmediatez.

En este sentido, para la procedencia del reconocimiento de los gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnizaciones, únicamente deben acreditarse los siguientes elementos:

(i) la existencia de un accidente de tránsito, determinado por el médico tratante a partir de su valoración clínica y el registro en la historia clínica; (ii) la inexistencia de una póliza SOAT legal y vigente; y (iii) la existencia de víctimas derivadas del hecho.

Por lo anterior, se concluyó que la actuación administrativa adelantada por esta Entidad se encuentra debidamente fundamentada y ajustada al marco legal vigente, razón por la cual no prosperó la solicitud de revocatoria directa.

2) lo demás que consideren pertinente.

En consecuencia, se informa que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante, toda vez que la actuación administrativa se ha desarrollado conforme a las normas que regulan la materia, respetando el debido proceso y garantizando el derecho de defensa, mediante la expedición de actos administrativos motivados y la atención oportuna de las solicitudes presentadas.